



Asamblea General

Distr. general
11 de agosto de 2000
Español
Original: inglés

Quincuagésimo quinto período de sesiones

Tema 116 a) del programa provisional*

Cuestiones relativas a los derechos humanos: aplicación de los instrumentos de derechos humanos

La tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes

Nota del Secretario General**

El Secretario General tiene el honor de transmitir a los miembros de la Asamblea General el informe provisional presentado por Sir Nigel Rodley, Relator Especial de la Comisión de Derechos Humanos sobre la cuestión de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, de conformidad con el párrafo 29 de la resolución 54/156 de la Asamblea General.

* A/55/150.

** De conformidad con el párrafo 1 de la sección C de la resolución 54/248, se presenta este informe el 11 de agosto de 2000 a fin de incluir la mayor cantidad posible de información actualizada.

Informe provisional presentado por el Relator Especial de la Comisión de Derechos Humanos sobre la cuestión de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes

I. Introducción

1. El presente informe es el segundo presentado a la Asamblea General por el Relator Especial de la Comisión de Derechos Humanos sobre la cuestión de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Sir Nigel Rodley, de conformidad con la resolución 54/156 de la Asamblea General y la resolución 2000/43 de la Comisión de Derechos Humanos. Este informe contiene cuestiones de especial interés para el Relator Especial, en particular las tendencias generales y acontecimientos recientes en los mecanismos de las Naciones Unidas sobre derechos humanos que resultan pertinentes a su mandato.

2. De conformidad con la resolución 54/156 de la Asamblea General, el presente informe se ocupa de las cuestiones de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes a que se somete a mujeres y las condiciones que llevan a estas formas de tortura, así como cuestiones relativas a la tortura de niños. El Relator Especial quisiera señalar a la atención de la Asamblea sus informes dirigidos anteriormente a la Comisión sobre estas cuestiones y que figuran respectivamente en los documentos E/CN.4/1995/34 y E/CN.4/1996/35.

3. En vista de la aprobación por la Comisión de Derechos Humanos, en su 56º período de sesiones, de la resolución 2000/61 sobre los defensores de los derechos humanos, en que la Comisión pidió al Secretario General que nombrara un representante especial para que informara acerca de la situación de los defensores de derechos humanos, el Relator Especial quisiera encarar la cuestión de la tortura y los defensores de derechos humanos. El tema de la conmemoración en este año del Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo de las Víctimas de la Tortura (26 de junio) fue la cuestión de las reparaciones a las víctimas de la tortura. El Relator Especial considera apropiado encarar esta cuestión en el presente informe, al igual que la cuestión conexas de la impunidad de quienes perpetran esas torturas. Habida cuenta del tema elegido para el diálogo especial del último período de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos, se dedicará un capítulo a la cuestión de la pobreza y el goce de los derechos humanos.

4. Por último, el Relator Especial apoyó firmemente el llamamiento del Secretario General, formulado anteriormente en este año, para que los Estados ratifiquen los 25 tratados principales, y que comprenden siete instrumentos de derechos humanos, entre los cuales se cuenta la Convención contra la Tortura.

II. Cuestiones de especial interés para el Relator Especial

A. Formas de tortura que se aplican específicamente a unos de los sexos

5. El Relator Especial continuó recibiendo información según la cual se somete a mujeres a ciertas formas de tortura específicas a su sexo, entre las cuales se cuentan violaciones, abuso sexual y hostigamiento, pruebas de virginidad, abortos forzados o abortos espontáneos inducidos. Se ha comunicado a los distintos gobiernos durante años anteriores una gran cantidad de casos particulares, en su mayoría junto con el Relator Especial de la Comisión de Derechos Humanos, sobre la violencia contra las mujeres, sus causas y consecuencias. No se han señalado a la atención del Relator Especial, después de su estudio de 1994 (E/CN.4/1995/34), cuestiones concretas acerca de formas de tortura que se aplican específicamente al sexo femenino, salvo informaciones acerca de las así llamadas pruebas de virginidad (véase *infra*). En el estudio se analizaron cuestiones relacionadas con casos de tortura dirigidos en forma desproporcionada o fundamentalmente contra mujeres y las condiciones que propician tales casos. Tal como lo recomendara el seminario sobre la incorporación de la perspectiva de género en el sistema de derechos humanos, convocado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la División para el Adelanto de la Mujer de la Secretaría de las Naciones Unidas y el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer, que se celebró en Ginebra del 26 al 28 de mayo de 1999, el Relator Especial agradecerá que se le haga llegar información acerca de ciertos tipos de violaciones pertinentes a su mandato analizadas desde una perspectiva de género.

6. El Relator Especial acoge con beneplácito la aprobación por la Asamblea General el 6 de octubre de 1999, mediante su resolución 54/4, del Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. El Protocolo Facultativo quedó luego abierto a la firma y ratificación el 10 de diciembre, y hasta el momento ha sido firmado por 24 Estados. Entrará en vigor tres meses después de la décima ratificación o adhesión.

7. El Protocolo Facultativo, entre otras cosas, estipula que tanto personas como grupos de personas podrán presentar comunicaciones personales al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Sus criterios para la recepción de denuncias y sus funciones se basan en los procedimientos existentes o prácticas comparables de otros instrumentos internacionales de derechos humanos, tales como el Comité de Derechos Humanos y el Comité contra la Tortura. El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer considerará que una comunicación es admisible si se han agotado todos los recursos disponibles a nivel nacional y si la denuncia no ha sido examinada anteriormente por el Comité o está siendo examinada en el marco de otro procedimiento de investigación o arreglo internacional. El Relator Especial también señala la posibilidad de que el Comité tome medidas de carácter provisional. Tras recibir una comunicación y antes de pronunciar su decisión definitiva acerca de los méritos del caso, el Comité tendrá la opción de enviar comunicaciones de carácter urgente en que se pida a los Estados partes que tomen las medidas necesarias para proteger a la presunta víctima o víctimas de daños irreparables. En forma similar, el Relator Especial toma nota con reconocimiento de la inclusión del artículo 11 que requiere que el Estado parte asegure que todas las personas que se hallen bajo su jurisdicción no sean objetos de malos tratos ni intimidación por ponerse en comunicación con el Comité. El Relator Especial señala que en la Convención contra la Tortura figura una disposición similar (véase el artículo 13).

8. El Relator Especial también quisiera recordar que el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, en su recomendación general No. 19, titulada “La violencia contra la mujer” (véase A/47/38), enumera el derecho a no ser sometido a torturas o a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes entre los derechos menoscabados o anulados por la violencia basada en el sexo, según el derecho internacional y que constituye discriminación en el sentido de la Convención.

Afirma que la definición del artículo 1 de la Convención¹ deberá interpretarse como que comprende la violencia basada en el sexo, vale decir la violencia dirigida contra la mujer porque es mujer o que la afecta en forma desproporcionada. En esto se incluyen actos que infligen daño o sufrimiento de índole física, mental o sexual, las amenazas de esos actos, la coacción y otras formas de privación de libertad. Si bien los mecanismos establecidos en otros instrumentos internacionales de derechos humanos se encuentran igualmente a disposición de hombres y mujeres, el Relator Especial acoge con beneplácito la próxima oportunidad que se da a las mujeres y a los defensores de los derechos de la mujer de utilizar el mecanismo concreto que estipula el Protocolo Facultativo.

9. Por último, el Relator Especial toma nota de la aprobación, el 29 de marzo de 2000, por el Comité de Derechos Humanos de la observación general No. 28 sobre la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, según el artículo 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (véase A/55/40). En el párrafo 11 de la observación general, el Comité pide que, a fin de poder evaluar el cumplimiento del artículo 7 del Pacto (prohibición de la tortura) y el artículo 24 (protección especial de los niños), los Estados partes proveerán

“información sobre las leyes y prácticas nacionales en cuanto a la violencia doméstica y de otro tipo contra las mujeres, incluida la violación. El Comité también necesita saber si el Estado parte brinda acceso a servicios seguros de aborto a las mujeres embarazadas como resultado de una violación. Los Estados partes también deberán proporcionar al Comité información sobre las medidas para evitar los abortos forzados o la esterilización forzada. Los Estados partes en que exista la práctica de la mutilación genital deberán ofrecer información sobre sus alcances y las medidas impuestas para eliminarla. La información brindada por los Estados partes sobre todas estas cuestiones deberá incluir medidas de protección, incluso remedios jurídicos, para las mujeres cuyos derechos hayan sido violados en relación con el artículo 7.”

Igualmente, el Relator Especial agradecerá toda información sobre estas cuestiones, proveniente ya sea de fuentes gubernamentales o no gubernamentales.

B. La tortura y los niños

10. El Relator Especial continuó recibiendo información acerca de una notable cantidad de casos en que las víctimas de torturas y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes son niños. Las condiciones de la detención de niños en centros y prisiones antes de enjuiciarlos continúan siendo motivo de preocupación para el Relator Especial. A menudo las condiciones de grave hacinamiento, falta de sanidad, alimentos y vestimenta inadecuados e insuficientes, se ven exacerbadas por la escasez o falta de profesionales adecuadamente capacitados. La consiguiente falta de una atención apropiada a las necesidades emotivas, educacionales, de rehabilitación y recreo de los niños detenidos pueden llevar a condiciones que representan un trato cruel o inhumano. El Relator Especial también ha seguido recibiendo información acerca de niños que presuntamente estaban corriendo el riesgo de que se los sometiera a actos deliberados de tortura, incluso mediante formas de abuso sexual.

11. El Relator Especial recibió información según la cual niños fueron sometidos a tratos crueles, inhumanos o degradantes en instituciones no penales. A diferencia de la mayoría de los adultos, los niños pueden ser privados de su libertad en una serie de entornos legales distintos a los vinculados al sistema de justicia penal y, por consiguiente, se informa que son prácticamente vulnerables frente a ciertas formas de torturas o malos tratos en un medio institucionalizado. Los sistemas de hogares de guarda e instituciones residenciales, en que se atiende a los niños bajo la tutela del Estado por ser huérfanos o haber sido retirados del cuidado de sus padres para su propia protección, según se informa en algunos casos dan lugar a formas inhumanas de disciplina o extremos de descuido. Particularmente en el caso de niños muy pequeños estos abusos suelen representar tratos crueles e inhumanos. Los trabajadores estatales en las instituciones de acogida a menudo están poco capacitados y cuentan con escasa supervisión y en muchos casos son capaces, no necesariamente con aprobación oficial pero debido a una vigilancia insuficiente, de someter a los niños a abusos físicos, emocionales o sexuales que raramente serían tolerados en instituciones de justicia juvenil. Problemas similares también parece experimentarse en algunas instituciones que atienden a niños con enfermedades mentales u otros impedimentos. Se han comunicado casos en que la legislación vigente permite que los niños queden en prisión por motivos de enfermedad mental y,

en algunas situaciones, se afirma que en esas prisiones se los mantiene encadenados.

12. A diferencia de la detención dentro del sistema judicial, que en muchos casos se realiza durante un período previamente determinado, los niños a veces permanecen en esas instituciones sometidos a tratos crueles, inhumanos o degradantes sin límite de tiempo ni revisión periódica por la justicia de la decisión que llevara a su institucionalización. Este encierro indeterminado, particularmente en instituciones que restringen severamente su libertad de movimiento, puede asimismo constituir un trato cruel o inhumano. Los niños reclusos en estas instituciones las abandonan cuando llegan a la mayoría de edad. En algunos países se ha comunicado que estos niños a menudo no están preparados para la vida independiente como resultado del tratamiento degradante que han recibido y son particularmente propensos a entrar en contacto con el sistema de justicia penal en una etapa ulterior, con lo cual se perpetúa el ciclo que expone a estas personas a repetidas victimizaciones. Los niños impedidos que sufren tratamientos crueles e inhumanos en instituciones suelen quedar sometidos a estos tratamientos durante toda su vida, porque continúan institucionalizados como resultado de sus impedimentos. Algunos de estos niños son particularmente vulnerables frente a un continuo tratamiento degradante, ya que no pueden articular sus experiencias ni saben presentar denuncias, como resultado de su incapacidad o su aislamiento.

13. El Relator Especial toma nota de la presunta falta de vigilancia apropiada y de mecanismos de denuncia en las instituciones que tratan estos niños. Se ha afirmado que en algunos casos esto puede exacerbarse por la falta de consejeros, incluso para los niños de más edad, debido a su estatuto de menores; además se ha afirmado que algunos niños sólo están representados por sus padres o tutores legales, quienes no siempre actúan en los mejores intereses del niño. La falta de una vigilancia apropiada de las instituciones para desalentar, o remediar los malos tratos parece ser, según se informa, un problema corriente en todo tipo de establecimientos para niños.

14. Los niños atendidos en instituciones también pueden ser particularmente vulnerables frente a las torturas y malos tratos, no sólo debido a su escasa edad, sino también porque los niños de grupos particularmente vulnerables están sobrerrepresentados en esos establecimientos. Los niños que antes vivían en la calle, los refugiados y desplazados internos, los niños sin

acompañantes, que han pedido asilo, los considerados migrantes ilegales, los niños de grupos minoritarios y los que han sufrido abusos anteriormente, ya sea de funcionarios públicos o dentro de su familia son los que tienen la mayor probabilidad de estar recluidos en instituciones. Al ser miembros de grupos marginados, tienen menos posibilidades de presentar denuncias de carácter oficial acerca de tratamientos crueles, inhumanos o degradantes. Las actitudes discriminatorias vigentes frente a ciertos grupos vulnerables pueden significar que se dé menos credibilidad a sus afirmaciones o que se considere que no tienen pleno derecho a iguales normas de protección.

15. El Relator Especial está particularmente preocupado por informaciones que ha recibido acerca de niños que han sido sometidos a formas extremas de tortura en situaciones de conflicto armado. Además, el Relator Especial observa que la falta de protección para los niños en algunos Estados ha sido motivo de grave preocupación para el Comité de los Derechos del Niño. Las violaciones que se comunicaron en relación con los conflictos armados comprenden graves formas de tortura y otros malos tratos infligidos a los niños de la población civil y a niños contratados en las fuerzas armadas, ya sea presuntamente por el Estado o por fuerzas no gubernamentales. El Relator Especial recuerda que todas las partes en los conflictos armados, ya sean de carácter internacional o no, tienen que respetar los principios del derecho humanitario, que prohíbe la tortura y otras formas de tratos crueles, que incluyen mutilaciones. En cierto país, estos tratos crueles presuntamente comprenden formas tan brutales de tortura como la amputación de miembros. Las amnistías negociadas tras conflictos armados suelen conceder impunidad al Estado, a las fuerzas paramilitares o no gubernamentales que, en algunos casos, han perpetrado formas extremas de tortura en niños. Además, el Relator Especial observa que el reclutamiento forzado de niños en las fuerzas armadas es motivo de gran preocupación para el Comité de los Derechos del Niño. Se ha dicho que algunos niños fueron reclutados por la fuerza, a veces a edades muy tempranas, en violación de las normas del derecho humanitario internacional, y luego obligados a realizar traumatizantes ataques contra sus propias familias y comunidades. A este respecto, el Relator Especial alienta a los Estados a que ratifiquen el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados, que aprobó la Asamblea General mediante su resolución 54/263, de 25 de mayo

de 2000, y que apoya la labor del Representante Especial del Secretario General sobre los niños en los conflictos armados.

C. La tortura y los defensores de los derechos humanos

16. Con el transcurso de los años, el Relator Especial ha recibido información acerca de una cantidad notable de casos en que las víctimas de torturas y tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes son defensores de los derechos humanos. Si bien no existen pruebas para sugerir que los defensores de los derechos humanos sean generalmente sometidos a formas particulares de torturas o malos tratos aplicadas únicamente a ellos debido a su condición de defensores de los derechos humanos, se plantea no obstante una necesidad clara y precisa de formular un comentario por separado acerca de esta cuestión. Esta necesidad proviene de la consideración de que los defensores de los derechos humanos se encuentran en la vanguardia de la defensa de estos derechos y que cumplen un papel esencial en la denuncia de las violaciones de derechos humanos. El Relator Especial quisiera destacar que, al igual que otros mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas, para el cumplimiento de su mandato su labor depende en gran medida de la información recibida de ellos.

17. Más allá de las formas tradicionales de represión de los derechos humanos, tales como las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, las detenciones y torturas arbitrarias, un gran número de comunicaciones recibidas por el Relator Especial se refieren al hostigamiento sistemático de los defensores de derechos humanos, sus parientes y las personas asociadas con ellos, con el objeto de evitar que cumplan sus actividades de derechos humanos. Las amenazas a su integridad física, que incluyen amenazas de muerte, restricciones jurídicas vinculadas a la existencia de las organizaciones a que pertenecen o a sus actividades, la descalificación social mediante la propaganda, la desinformación y la intimidación, la persecución judicial mediante cargos penales inventados, la negativa de acceso a los medios de ganarse la vida y a los servicios sociales, la constante vigilancia, la negativa a otorgarles documentos de identidad o la falta de la debida protección de las autoridades públicas frente a las amenazas provenientes de ciertos agentes no estatales, se cuentan entre las formas que se denuncian más

frecuentemente de evitar que los defensores de los derechos humanos realicen sus actividades.

18. Si bien el Relator Especial ha intervenido en diversas oportunidades en nombre de los defensores de los derechos humanos que se sabía estaban corriendo el riesgo de que se los sometiera a torturas u otras formas de malos tratos, o que presuntamente habían sido sometidos a torturas, también ha intervenido en nombre de ciertos defensores de derechos humanos no directamente amenazados de tortura, pero que por distintos medios se veían impedidos, de manera no acorde con su mandato, de brindar asistencia jurídica y/o humanitaria a las víctimas de la tortura. En el primero de los casos, intervino principalmente junto con el Relator Especial de la Comisión de Derechos Humanos acerca de la independencia de jueces y abogados.

19. La Convención contra la Tortura se refiere al deber de los Estados partes de velar por que toda persona que alegue haber sido sometida a tortura en cualquier territorio bajo su jurisdicción tenga derecho a presentar una queja y que quien presente la queja y los testigos estén protegidos contra malos tratos e intimidación como consecuencia de la queja o del testimonio presentado (artículo 13). El Relator Especial estima que este derecho se vería gravemente menoscabado si los defensores de los derechos humanos se vieran impedidos de actuar en nombre de las víctimas de la tortura. En tal contexto, el Relator Especial envió llamamientos de carácter urgente en nombre de los abogados que representaban a víctimas de torturas, que según se había informado fueron amenazados u hostigados en relación con procedimientos jurídicos pendientes relativos a presuntos casos de tortura.

20. El Relator Especial también quisiera recordar a los gobiernos de que mediante su resolución 2000/22 sobre cooperación con los representantes de los órganos de derechos humanos de las Naciones Unidas, la Comisión los instó a que se abstuvieran de todo acto de intimidación o represalia contra a) quienes traten de cooperar o hayan cooperado con representantes de los órganos de derechos humanos de las Naciones Unidas, hayan prestado testimonio ante ellos o les hayan proporcionado información; b) quienes recurran o hayan recurrido a los procedimientos establecidos bajo los auspicios de las Naciones Unidas para la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales y todos aquellos que les hayan prestado asistencia jurídica con tal fin (párr. 1). En esa resolución la Comisión pidió a todos los representantes de los órganos de

derechos humanos de las Naciones Unidas que siguieran adoptando medidas urgentes, de conformidad con sus mandatos, para tratar de evitar el impedimento al acceso a los procedimientos de derechos humanos establecidos por las Naciones Unidas en toda forma, y que se produzcan tales intimidaciones y represalias (párrs. 2 y 3). En el marco de dicha resolución se envió un llamamiento de carácter urgente en nombre de ciertos defensores de derechos humanos que se consideraba que sufrían graves hostigamientos como represalia por su cooperación con el Relator Especial durante una misión de determinación de los hechos.

21. El Relator Especial también quisiera señalar a la atención de la Asamblea General la Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos, aprobada mediante su resolución 53/144, de 8 de marzo de 1999. La Declaración afirma que toda persona tiene derecho “a ofrecer y prestar asistencia letrada profesional u otro asesoramiento y asistencia pertinentes para defender los derechos humanos y las libertades fundamentales (inciso c) del párrafo 3 del artículo 9); también estipula que el Estado garantizará la protección por las autoridades competentes de toda persona, individual o colectivamente, frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la presente Declaración (párrafo 2 del artículo 12).

22. Además el Relator Especial quisiera señalar a la atención de la Asamblea General los principios sobre la documentación eficaz de la tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes, también conocido con el nombre de Protocolo de Estambul. Los principios fueron adjuntados al informe anterior a la Asamblea General (A/54/426); también la Comisión señaló estos principios a la atención de los Gobiernos que se adjuntaron a la resolución 2000/43, que fue aprobada en su último período de sesiones. Los principios afirman que las presuntas víctimas de torturas o malos tratos, los testigos, quienes realicen la investigación, así como sus familias, serán protegidos de actos o amenazas de violencia o de cualquier otra forma de intimidación que pueda surgir a resultas de la investigación (inciso b) del párrafo 3).

23. Por último, el Relator Especial acoge con beneplácito la creación de un mecanismo especial encargado de ocuparse exclusivamente de la cuestión de los defensores de los derechos humanos. Tal como se afirmó correctamente durante la reunión de 1999 de los relatores especiales, expertos y presidentes de grupos de trabajo del programa de procedimientos especiales y servicios de asesoramiento de la Comisión de Derechos Humanos, si bien todos los mecanismos existentes se comprometieron a cooperar entre sí a este respecto, se entiende que dada la índole del problema ellos solos no podían ocuparse satisfactoriamente del mismo en el cumplimiento de sus mandatos específicos (véase E/CN.4/2000/5, párr. 87 p)). El Relator Especial confía en que en un espíritu de cooperación y a fin de evitar la duplicación de la labor, se puedan hallar medios, en particular dentro de la Secretaría, de coordinar las medidas con el Representante Especial del Secretario General sobre defensores de los derechos humanos.

D. Reparaciones para las víctimas de la tortura

24. Algunos instrumentos internacionales y regionales de derechos humanos imponen a los Estados el deber de brindar acceso a la justicia y una reparación adecuada y justa para las víctimas de violaciones de los derechos humanos. En cuanto a las violaciones que incumben al mandato del Relator Especial, éste se guía por el artículo 14 de la Convención contra la Tortura que afirma que todo Estado parte velará por que su legislación garantice a la víctima de un acto de tortura la reparación y el derecho a una indemnización justa y adecuada, incluidos los medios para su rehabilitación lo más completa posible. En el caso de muerte de la víctima como resultado de un acto de tortura, las personas a su cargo tendrán derecho a indemnización².

25. El anexo al informe final (E/CN.4/2000/62) del experto independiente de la Comisión de Derechos Humanos sobre el derecho de restitución, indemnización y rehabilitación de las víctimas de violaciones graves de los derechos humanos y las libertades fundamentales, Sr. Cherif Bassiouni, contiene los principios y directrices básicos para el derecho a interponer recursos y obtener reparación para víctimas de violaciones de las normas de derechos humanos y del derecho internacional humanitario que, según se dice, reflejan o bien el derecho internacional vigente, o bien las normas que están surgiendo a este respecto.

26. Según estas directrices y principios básicos, el derecho de la víctima a interponer recursos comprende a) el acceso a la justicia; b) la reparación del daño sufrido; y c) el acceso a la información fáctica sobre las violaciones (párr. 11). En cuanto el derecho a una reparación se dice que una reparación suficiente, efectiva y rápida, proporcional a la gravedad de las violaciones y al daño sufrido (párr. 15) deberá incluir las siguientes formas: restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición (párr. 21). El contenido de estas formas de reparación se elabora en los párrafos 22 a 25. En cuanto a su mandato, el Relator Especial observa en particular la recomendación de que debería indemnizarse todo perjuicio evaluable económicamente que fuera consecuencia de una violación de las normas internacionales de derechos humanos, del derecho internacional humanitario tal como: a) el daño físico o mental incluido el dolor, el sufrimiento y la angustia ...; y e) los gastos de asistencia jurídica o de expertos, medicinas y servicios médicos, psicológicos y sociales (párr. 23). Además la rehabilitación debería incluir la atención médica y psicológica, así como servicios jurídicos y sociales (párr. 24).

27. El Relator Especial comparte la opinión del experto independiente de que el Estado deberá velar por que en la medida de lo posible, el derecho interno previera para las víctimas de violencias o traumas una consideración y atención especiales a fin de evitar que los procedimientos jurídicos y administrativos destinados a lograr justicia y reparación den lugar a un nuevo trauma (párr. 10). El Relator Especial observa que esta recomendación es particularmente pertinente a los tipos de violaciones que caen dentro de su mandato. Por ejemplo, el Relator Especial ha recibido informaciones acerca de la así llamada “prueba de la virginidad”, que se ha denunciado como traumática. El Relator Especial ha recibido información según la cual mujeres, incluso menores de edad, eran sometidas a estas pruebas tras haber presentado una denuncia de violación. Se afirmó que no sólo la manera en que se realizaban las pruebas, sino el propio hecho de que las sometiera a ese tipo de “inspección” constituía una experiencia traumatizante y humillante que además representaba un estigma en el contexto sociocultural particular en que vivían estas mujeres.

28. El Relator Especial quisiera destacar la relación inherente entre el derecho de las víctimas de tortura a obtener reparaciones y la prevención o no repetición de futuras violaciones. Se ha establecido este vínculo

entre otras cosas en la versión revisada del informe final del Sr. Louis Joinet acerca de la cuestión de la impunidad de los autores de violaciones de los derechos humanos (derechos civiles y políticos) (E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1) y el estudio del Sr. Theo van Boven acerca del derecho a restitución, indemnización y rehabilitación a las víctimas de violaciones flagrantes de derechos humanos y las libertades fundamentales (E/CN.4/Sub.2/1993/8). El Relator Especial estima que las reparaciones, más allá del fin de mitigar el sufrimiento y de brindar justicia a las víctimas eliminando o corrigiendo en la medida de lo posible las consecuencias de los actos ilícitos, tiene un aspecto inherente de prevención y disuasión.

29. En su declaración conjunta el Día Internacional de las Naciones Unidas en apoyo a las Víctimas de la Tortura con el Comité contra la Tortura, la Junta de Síndicos del Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para las Víctimas de la Tortura y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Relator Especial instó a todos los Estados a que brindaran reparaciones justas y adecuadas, incluida la compensación y rehabilitación de las víctimas de la tortura, dentro de su jurisprudencia interna. En esa oportunidad también se destacó la creciente necesidad de ofrecer asistencia jurídica para obtener reparaciones, compensación y servicios de rehabilitación para las víctimas de la tortura.

30. Cabe señalar que, a fin de contar con toda la información pertinente, el Relator Especial pide información en su carta modelo de transmisión de acusaciones a los gobiernos, acerca de la índole y el monto de la indemnización otorgada a la víctima o a sus parientes. No obstante, cabe destacar que el Relator Especial rara vez ha recibido detalles acerca de las indemnizaciones.

31. La impunidad resulta incompatible con las reparaciones amplias a las víctimas de la tortura. Además, el Relator Especial quisiera reiterar su convicción, que ha declarado en varias oportunidades, de que la continuación de la práctica de la tortura obedece en parte a la impunidad, vale decir, la aplicación de obstáculos de jure y de facto al enjuiciamiento de los autores de las torturas (véase E/CN.4/1999/61, anexo). En particular, el Relator Especial ha señalado con preocupación las medidas que utilizan los Estados para limitar la responsabilidad jurídica, tales como la adopción de leyes de indemnidad o la concesión de amnistías.

32. Además, el Relator Especial quisiera recordar la obligación de los Estados partes en la Convención contra la Tortura de aplicar una jurisdicción universal respecto de los presuntos autores de torturas (artículos 5 y 7) y de que la tortura constituya un delito en su legislación penal (artículo 4). Recuerda además la resolución más reciente aprobada por la Comisión de Derechos Humanos sobre la cuestión de la tortura (resolución 2000/43), en que la Comisión destacó la responsabilidad general de todos los Estados de investigar las acusaciones de tortura y asegurarse que las personas que fomenten, ordenen, toleren o cometan actos de tortura deben ser consideradas responsables de ellos. En el marco del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Europea de Derechos Humanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la jurisprudencia indica que la falta de enjuiciamiento, o de por lo menos una investigación en forma que conduzca posiblemente al enjuiciamiento, resulta incompatible con las responsabilidades de los Estados que dimanen de estas convenciones. El Relator Especial recuerda también la aprobación el 17 de julio de 1998 del Estatuto de Roma del Tribunal Penal Internacional, cuyo preámbulo expresa claramente que la creación del Tribunal obedece a la decisión de poner fin a la impunidad de los autores de esos crímenes y a contribuir así a la prevención de nuevos crímenes. También afirma que los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto no deben quedar sin castigo y que, a tal fin, hay que adoptar medidas en el plano nacional e intensificar la cooperación internacional. Recuerda además que es deber de todo Estado ejercer su jurisdicción penal contra los responsables de crímenes internacionales. Habida cuenta de lo mencionado es de la opinión del Relator Especial que los Estados pueden ejercer ahora una jurisdicción universal sobre los presuntos autores de torturas.

33. En ese contexto, el Relator Especial acoge con beneplácito la decisión de la Cámara de Lores, el Tribunal Supremo del Reino Unido, que en marzo de 1999 llegó a la conclusión de que Augusto Pinochet Ugarte, Jefe de Estado de Chile, no tenía inmunidad respecto de su extradición a España, donde se lo enjuiciaría acusado de abusos de derechos humanos, incluida la tortura. La Cámara de Lores determinó, con referencia a la Convención contra la Tortura, que su inmunidad no era consecuente con la redacción de la Convención. Igualmente el Relator Especial tomó nota con beneplácito de la decisión de la Corte Suprema de Chile de retirar la

inmunidad al General Pinochet abriendo el paso a su futuro juicio en relación con un notorio escuadrón militar de la muerte, que sería responsable de la ejecución de 72 presos políticos. El Relator Especial expresó recientemente su preocupación al Gobierno del Senegal acerca de la independencia de los jueces y abogados, en las circunstancias que rodean el reciente retiro de una acusación de complicidad en tortura contra el ex Presidente del Chad, Hissène Habré.

E. La tortura y la pobreza

34. Tal como lo declarara durante su alocución ante la Comisión de Derechos Humanos en su 56º período de sesiones, el Relator Especial estima que la cuestión de la pobreza es sumamente pertinente a su mandato.

35. Es cierto que muchos de los casos más destacados de tortura que se han señalado a la atención de la comunidad internacional se refieren a personas vinculadas a actividades políticas de diversa índole. Estas víctimas de tortura suelen ser de determinada clase o vinculadas a organizaciones con contactos internacionales. Sin embargo, la experiencia de sus misiones en diferentes partes del mundo ha llevado al Relator Especial a observar que la abrumadora mayoría de los sometidos a torturas y malos tratos son delincuentes comunes de los estratos más bajos de la sociedad. Estos son los que no pueden permitirse contar con buenos abogados, o que sólo tendrán acceso a abogados poco dedicados, en algunos casos proporcionados por el Estado, o no tienen acceso a ningún abogado; sus familias no tienen conexiones que puedan impresionar a la policía, a los fiscales o a los jueces, y carecen de medios para pagar cuidados de la salud que podrían salvarles la vida y que se consiguen fuera del lugar de detención, o para comprar alimentos adecuados cuando las autoridades e instituciones penales no se los ponen a disposición, y que no tienen idea de cuáles son sus derechos, ni siquiera que tienen derecho a no ser torturados o de qué manera pueden lograr que se respeten sus derechos. Por cierto a menudo son miembros del nivel más bajo de una subclase desvinculada de todas las oportunidades de lograr una vida económicamente productiva como ciudadanos. También cabe señalar que con cada vez más frecuencia se reciben informaciones de fuentes no gubernamentales respecto de torturas o malos tratos a personas que se considera están vinculadas a actividades delictivas ordinarias. Cabe preguntarse en qué medida esta tendencia puede reflejar una mayor conciencia

acerca de un problema que se viene arrastrando desde hace mucho tiempo.

36. El Relator Especial observó durante una de sus misiones que el personal de la prisión de cierto país recibía escasa paga, tenía insuficiente capacitación y vivía en condiciones tales que les hacían perder toda la compasión que pudieran tener por las personas a su cargo. En otros países se pueden hacer observaciones similares acerca de los funcionarios encargados del cumplimiento de las leyes en cuanto a sus salarios y condiciones de trabajo. En ese contexto cabe señalar que un número importante de casos que recibe el Relator Especial se refieren a golpizas y otras formas de malos tratos, especialmente en la custodia policial, tendientes presuntamente a obtener sobornos principalmente de los sospechosos de delitos comunes. Durante las misiones para determinación de los hechos, la falta de recursos financieros fue a menudo presentada por los funcionarios con una explicación, cuando no como una justificación por la falta de alimentos o de atención médica adecuada u oportuna a los detenidos. Muchos reclusos que necesitaban urgentemente de atención médica a menudo permanecían sin medicamentos presuntamente por falta de éstos o de medios de transporte para conducirlos a una institución médica apropiada. Por último, el Relator Especial observa con preocupación que los funcionarios encargados del cumplimiento de las leyes en los estratos más inferiores a menudo reconocían que, debido a la falta de medios para realizar investigaciones apropiadas de los casos que tenían ante sí, la violencia resultaba la forma más “fácil” y “simple” de obtener “resultados”. Esto, junto con una falta de entrenamiento apropiado es una de las causas primordiales de la tortura, especialmente en relación con los sospechosos de delitos comunes.

37. El Relator Especial no tiene ni la competencia ni los recursos técnicos para ofrecer soluciones para cambiar esta triste realidad. Estima que, mientras que las sociedades nacionales y, por cierto, la comunidad internacional no se ocupen de encarar los problemas de los pobres, los marginados y vulnerables, seguirán contribuyendo directamente a exponerlos al riesgo de la tortura en un círculo vicioso de brutalización que constituye una amenaza y una vergüenza para nuestra aspiración de una vida de dignidad y de respeto para todos.

Notas

¹ “A los efectos de la presente Convención, la expresión, ‘discriminación contra la mujer’ denota toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, el goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.”

² En forma similar el artículo 11 de la Declaración sobre la protección de todas las personas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes aprobada por la Asamblea General mediante su resolución 3452 (XXX), de 9 de diciembre de 1975, estipula que “cuando se demuestre que un acto de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes han sido cometidos por un funcionario público o a instigación de éste, se concederá a la víctima reparación e indemnización de conformidad con la legislación nacional”.
